

REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

**SECRETARIA JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
DE FACATATIVÁ (CUNDINAMARCA)**

Septiembre 8 de 2022: Al despacho el proceso contra **EDUARDO IGNACIO ACOSTA ROJAS** identificado con C.C. No. 80.376.435, informando que conforme a lo ordenado por este Juzgado en auto interlocutorio No. 0462 del 26 de agosto de 2022, se emite por parte del Asistente Social el Informe de Asistencia Social en fecha 2 de septiembre de 2022, para resolver la solicitud de Prisión Domiciliaria – art. 38G del C.P. -, invocada por el condenado. Sírvase proveer.

BLANCA CECILIA GUTIERREZ
SECRETARIA

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**



**JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ – CUNDINAMARCA**

Septiembre ocho (8) de dos mil veintidós (2022)

AUTO INTERLOCUTORIO No. 0480

CUI	258756000698201900197
Número Interno:	2021-0047
Sentenciado:	EDUARDO IGNACIO ACOSTA ROJAS
Identificación:	C.C. No. 80.376.435
Delito:	FABRICACIÓN, TRÁFICO, PORTE O TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO, ACCESORIOS, PARTES O MUNICIONES
Sitio de Reclusión:	CARCEL Y PENITENCIARIA MEDIA SEGURIDAD DE VILLETA CUNDINAMARCA
Decisión:	CONCEDE PRISIÓN DOMICILIARIA ART. 38G CP

1.- OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede el Despacho a resolver sobre la solicitud de prisión domiciliaria artículo 38G del C.P., invocada por el condenado **EDUARDO IGNACIO ACOSTA ROJAS** identificado con C.C. No. 80.376.435 quien se encuentra purgando pena en la CÁRCEL Y PENITENCIARIA MEDIA SEGURIDAD DE VILLETA CUNDINAMARCA,

2.- ASUNTO

Aunque la Ley 1709 de 2014 adicionó para los Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad las audiencias virtuales con el fin de resolver mediante audiencia pública las peticiones de los condenados, la misma no se puede llevar a cabo debido a que no se cuenta en este momento con la infraestructura necesaria y, además, la misma Ley concedió un término de un (1) año al Consejo Superior de la Judicatura y a la USPEC para implementar el sistema. Por lo anterior procede el Juzgado a pronunciarse sobre la petición incoada bajo las norma de la Ley vigente.

3. ANTECEDENTES PROCESALES

Por hechos ocurridos el 6 de octubre de 2019 y preacuerdo aprobado, el Juzgado Penal del Circuito de Villeta Cundinamarca, mediante sentencia de 14 de septiembre de 2020, resolvió condenar a **EDUARDO IGNACIO ACOSTA ROJAS** a la pena principal de **CINCUENTA Y CUATRO (54) MESES DE PRISIÓN** y a la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, por un término igual al de la pena

REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

principal y la privación del derecho a la tenencia y porte de armas de fuego, por un término de tres (3) años, como autor responsable del delito de **FABRICACIÓN, TRÁFICO, PORTE O TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO, ACCESORIOS, PARTES O MUNICIONES (artículo 365 del C.P.)**. NEGÓ la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria previsto en el artículo 38 y 38 B del C.P., pero **CONCEDIÓ** la prisión domiciliaria transitoria – decreto 546 de 2020, indicándose que se le concede el término de seis (6) meses y finalizado este término deberá presentarse al Establecimiento Carcelario que lo vigila, so pena de asumir lo previsto en el decreto legislativo aplicado. El fallo condenatorio cobró ejecutoria el 14 de septiembre de 2020.

Conforme lo dispuesto en sentencia condenatoria el infractor suscribió diligencia de compromiso el 15 de septiembre de 2020 y fijó su domicilio en el **Barrio Las Brisas, Casa de la señora Elida Enith Acosta en Utica Cundinamarca** y se expidió Boleta de Encarcelación Prisión Domiciliaria Transitoria No. 009¹

EDUARDO IGNACIO ACOSTA ROJAS ha purgado pena dentro del presente asunto en dos oportunidades: i) **del 6 al 7 de octubre de 2019** (el Juzgado Promiscuo Municipal de Utica Cundinamarca con funciones de control de garantías en vista que el ente Fiscal no solicitó medida de aseguramiento se ordenó la libertad inmediata del imputado²); y ii) **desde el 14 de septiembre de 2020**³

Este Juzgado AVOCO conocimiento el 9 de febrero de 2021, por auto interlocutorio No. 0275 de la misma fecha, resolvió EXTENDER los efectos de la prisión domiciliaria únicamente a su lugar de trabajo en la Finca Furatena en el municipio de Utica Cundinamarca, advirtiéndose que dicha autorización se otorgaba hasta el 14 de marzo de 2021, como quiera que el Juzgado Penal del Circuito con función de conocimiento de Villeta Cundinamarca en sentencia condenatoria del 14 de septiembre de 2020 concedió la prisión domiciliaria transitoria – decreto 546 de 2020 -, indicándose que se concedió el término de 6 meses, desde el día que se produjo su captura – *14 de septiembre de 2020 hasta el 14 de marzo de 2021* -, debiéndose presentar ante el Establecimiento Carcelario que lo vigila y asumir lo previsto en el decreto legislativo aplicado.

Como quiera que el condenado radicó solicitud de ampliación de permiso para trabajar, este despacho mediante auto interlocutorio No. 0148 del 24 de marzo de 2021, resolvió abstenerse de pronunciarse al respecto.

A través de auto interlocutorio No. 0462 del 26 de agosto de 2022, previo a resolver la solicitud de prisión domiciliaria – artículo 38G del C.P., invocada por el interno se ordenó al Asistente Social de este Juzgado realizar por el medio más expedito y determinar entre otras cosas en qué condiciones conviviría el sentenciado, la dirección y el entorno social, a fin de verificar la dirección suministrada Barrio Las Brisas del municipio de Utica Cundinamarca, en donde reside la señora ELIDA EMID ACOSTA ROJAS, hermana del condenado, identificada con C.C. No. 51.653.731 expedida en Bogotá D.C. - celular 3112758345, para el cumplimiento de la pena.

Es de anotar, que durante el curso del proceso este estrado judicial ha reconocido a favor del condenado un total de redenciones de pena de 5 meses y 10 días.

En esta oportunidad ingresa al despacho con la documentación allegada por la dirección de la CARCEL Y PENITENCIARIA MEDIA SEGURIDAD DE VILLET A CUNDINAMARCA, para el estudio de la prisión domiciliaria – artículo 38G del C.P., y con el Informe de Visita Social emitido el 2 de septiembre de 2022 por el Asistente Social de este Juzgado.

¹ Archivo 002 – folio 35 – expediente digitalizado.

² Acta audiencia de garantías y Boleta de libertad 02 - archivo 002 – folio 4 al 8 – expediente digitalizado.

³ Boleta de Encarcelación No. 009 Prisión Domiciliaria Transitoria - folio 35 – archivo 002 – expediente digitalizado.



3.1 Sobre EL COVID-19

Es de resaltar que debido a la pandemia que se sufre a nivel mundial y en la cual mediante Decreto 457 del 22 de marzo del 2020 expedido por la Presidencia de la República en el que declaró el estado de emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional y en Acuerdos PCSJA20-11517, 11518, 11519, 11521, 11526, 11527, 11528, 11529, 11532, 11546 y 11549 del 7 de mayo de 2020⁴ del Consejo Superior de la Judicatura, entre otras decisiones, prorrogó a los servidores de la Rama Judicial el trabajo de manera preferente en su domicilio con el fin de evitar la propagación del COVID-19.

En efecto, según las anteriores determinaciones, el INPEC, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 92 de la Ley 1709 de 2014, declaró el Estado de Emergencia Penitenciaria y Carcelaria en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional mediante Resolución 1144 del 22 de marzo de 2020. Del mismo modo en comunicación de fecha 14 de abril de 2020 mediante datos aplicativo misional SISIPEC WEB sostiene que: *"[...] De las 120.667 personas privadas de libertad en establecimientos penitenciarios y carcelarios, un total de 112,272 son hombres y 8,395 son mujeres. Asimismo, ese total, 36.240 están sometidas a medida aseguramiento de detención preventiva y 84.427 cumplen la ejecución de pena en establecimientos carcelarios y penitenciarios"*.

Al ser declarada esa Emergencia Sanitaria - Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 -, por el Ministerio de Salud y Protección Social, se deben adoptar medidas adicionales en materia de prevención y contención de la enfermedad coronavirus COVID-19, y, en procura de lo anterior, es tarea del Estado proteger especialmente a aquellas personas que se encontraren en condición de debilidad manifiesta de conformidad con el artículo 13 de la Carta Política.

Que la honorable Corte Constitucional, tras la verificación de constante vulneración los derechos a la población privada de la libertad y el aumento en los índices de hacinamiento dentro de los establecimientos penitenciarios y carcelarios, profirió sentencias T-153 de 1998, T-388 de 2013, T-762 2015, y el Auto 121 de 2018, por medio los cuales reitera el Estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario y carcelario e indica cuáles serían las acciones necesarias a implementar de cara a mitigar grave situación de derechos humanos de personas privadas de la libertad.

Sobre este tópico la Ley 65 de 1993 en su artículo 104 nos señala el acceso a la salud de los privados de la libertad.

En este sentido, el Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura, entre otras recomendaciones emitidas el 25 de marzo de 2020 para procurar la protección efectiva de la población privada de la libertad ante la actual crisis sanitaria, estimó razonable la disminución de la *población penitenciaria por medio de esquemas de liberación temprana, provisional o temporal*, dando prelación a los casos de reclusos en establecimientos cuya capacidad haya sido excedida (hacinamiento) y en aquellos en donde se verifiquen particulares condiciones de vulnerabilidad al contagio de la enfermedad.

Que el actual confinamiento convierte a los establecimientos penitenciarios y carcelarios en una zona de transmisión significativa de la enfermedad coronavirus COVID-19, y/o otras enfermedades lo que puede poner en riesgo el Estado salud de todas personas que interactúan en dicho entorno.

⁴ ARTÍCULO 5. Prestación del servicio. Mientras duren las medidas adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura con ocasión de la emergencia causada por el COVID19, los servidores de la Rama Judicial trabajarán de manera preferente en su casa mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, salvo que, de manera excepcional, para cumplir con las funciones o prestación del servicio fuera necesario el desplazamiento o la atención presencial en las sedes judiciales o administrativas, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º del Decreto 491 de 2020 y el numeral 13 del artículo 3º del Decreto 531 de 2020

REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

Así, con miras a la mitigación de la situación de crisis en los establecimientos carcelarios derivada de la pandemia, en aquella calenda el Gobierno Nacional mediante el Decreto 546 de 2020 *adoptó medidas sanitarias tendientes a la protección de la población carcelaria vulnerable frente al COVID-19 y se ocupó de establecer mecanismos para combatir el hacinamiento carcelario, así como para prevenir y mitigar la propagación de la pandemia*⁵.

Bajo este punto reglamentó la concesión de la detención (fase investigativa y de juzgamiento) y la prisión domiciliaria (fase de la vigilancia de la pena) transitorias por el término de 6 meses, excluyendo tipos penales, debido a su gravedad.

De acuerdo a lo anterior las autoridades judiciales no pueden estar al margen de la situación de crisis actual, y que, por el contrario, deben adoptar medidas necesarias y razonables para conjurar, en el marco de sus funciones constitucionales y legales, la problemática que se presenta en los centros de reclusión. Ahora dado que la Presidencia de la República puso fin al término de la emergencia ello no obsta para el cuidado que se debe tener por el COVID y el control sanitario de los Centros Carcelarios, Penitenciarios y Estaciones de Policía ante la crisis de los hacinamientos ocurridos en los últimos tiempos y los nuevos brotes que se han generado en la actualidad.

4. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

4.1. COMPETENCIA

Este juzgado es competente para decidir sobre la solicitud de prisión domiciliaria impetrada por el condenado conforme lo señalan los numerales 1º, 3º, y 7 del artículo 38 de la Ley 906 de 2004, así como de la vigilancia del proceso al estar privado de la libertad en la CARCEL Y PENITENCIARIA MEDIA SEGURIDAD DE VILLETÁ CUNDINAMARCA, conforme los Acuerdos expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura, en especial, el Acuerdo No PSAA07-4119 del 9 de agosto de 2007.

Conforme a la fecha de los hechos ocurridos el 6 de octubre de 2019, el sentenciado **EDUARDO IGNACIO ACOSTA ROJAS** fue investigado y juzgado bajo el imperio de la Ley 599 de 2000 (modificada por la Ley 1453 de 2011) y 906 de 2004.

4.2. DE LA SOLICITUD

Vista la documentación allegada, para la concesión del mecanismo sustitutivo de la prisión domiciliaria prevista en el artículo 38G del C.P., se adjunta la documentación en la cual se relaciona los datos de contacto para el disfrute de la prisión domiciliaria y manifiesta el condenado en el escrito de solicitud que el inmueble se localiza en el **Barrio Las Brisas del municipio de Utica Cundinamarca, en donde reside la señora ELIDA EMID ACOSTA ROJAS, hermana del condenado, identificada con C.C. No. 51.653.731 expedida en Bogotá D.C. - celular 3112758345**, quien rindió ante la Notaría Única de Utica Cundinamarca día 24 de junio de 2022, la DECLARACIÓN EXTRAJUICIO No. 062, y manifestó hacerse cargo de su hermano **EDUARDO IGNACIO ACOSTA ROJAS** en su domicilio ubicado en el referenciado inmueble, en caso de que le sea concedida la prisión domiciliaria.

4.3. DE LA EXCLUSIÓN DE SUBROGADOS PENALES.

4.3.1 Sobre el Delito Endilgado y las exclusiones del art 68 A del C.P.

El legislador ha tratado de establecer un control y ajuste a los diferentes delitos que se han ido tipificando a través de los tiempos; cada día es más exigente la prioridad de buscar medios adecuados para evitar y contrarrestar los comportamientos criminales o divergentes que alteran la sociedad que forma un Estado.

⁵ CSJ RAD 794 (01-07-20)



Es así como el Estado busca la manera de rechazar esas acciones criminales con sustento en las leyes, fijando para ello penas. De ahí nace la política criminal, que es el conjunto de medidas de que se vale el Estado para enfrentar la criminalidad y la criminalización, compitiendo fundamentalmente al legislador en cuanto debe plasmar en textos legales las soluciones que se deben considerar para contrarrestar los comportamientos desviados ya surgidos o próximos a aparecer ⁶.

Siguiendo con la presente tesis, en lo que respecta al delito endilgado al aquí petente – **FABRICACIÓN, TRÁFICO, PORTE O TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO, ACCESORIOS, PARTES O MUNICIONES (artículo 365 del C.P.)** – el legislador, en uso de sus atribuciones, ha limitado la concesión de beneficios penales –art 68 A de la Ley 1709 de 2014, así como el art 26 de la Ley 1121 de 2006, o como lo ha hecho con otros delitos como por ejemplo los consagrados en el artículo 199 de la Ley 1098 de 2006, ajustando dichas medidas legislativas en delitos considerados particularmente como graves para la sociedad y de los cuales una vez promulgados, la Corte Constitucional en su función ha declarado su constitucionalidad (C-738 del 23 de julio de 2008 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra).

Es de resaltar la obligatoriedad del precedente Constitucional y las consecuencias de su desconocimiento por el suscrito Funcionario judicial, ello es contundente, como quiera que la misma Corte Constitucional en sentencia T-388 de mayo 28 de 2009, siendo M.P. Humberto Sierra P., ha sostenido:

“Los jueces que contradigan fallos de Constitucionalidad o desconozcan jurisprudencia de las altas cortes en violación de preceptos constitucionales o de un acto administrativo en general, incurren en prevaricato por acción.”

Pues bien, con la entrada en vigencia de la **Ley 1142 de 2007**, fue incorporado al Código Penal un **nuevo artículo (68A)** reglamentario de la exclusión de beneficios y subrogados penales para internos que se encontraran en una situación determinada, en aquel momento era *cuando la persona haya sido condenada por delito doloso o preterintencional dentro de los cinco (5) años anteriores*.

Posteriormente el artículo 68A incorporado al Código Penal por la Ley 1142 de 2007 fue objeto de modificación por el **artículo 28 de la Ley 1453 de 2011** que determinó que el nuevo texto de la norma sería el siguiente:

“ARTÍCULO 68A. EXCLUSIÓN DE LOS BENEFICIOS Y SUBROGADOS PENALES.

<Artículo modificado por el artículo 28 de la Ley 1453 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> No se concederán los subrogados penales o mecanismos sustitutivos de la pena privativa de libertad de suspensión condicional de la ejecución de la pena o libertad condicional; tampoco la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión; ni habrá lugar a ningún otro beneficio o subrogado legal, judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboración regulados por la ley, siempre que esta sea efectiva, cuando la persona haya sido condenada por delito doloso o preterintencional dentro de los cinco (5) años anteriores o cuando haya sido condenado por uno de los siguientes delitos: cohecho propio, enriquecimiento ilícito de servidor público, estafa y abuso de confianza que recaigan sobre los bienes del Estado, concusión, prevaricato por acción y por omisión, celebración de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales, lavado de activos, utilización indebida de información privilegiada, interés indebido en la celebración de contratos, violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, tráfico de influencias, peculado por apropiación y soborno transnacional.

PARÁGRAFO. *El inciso anterior no se aplicará respecto de la sustitución de la detención preventiva y de la sustitución de la ejecución de la pena en los eventos contemplados en los numerales 2, 3, 4 y 5 del artículo 314 de la Ley 906 de 2004 ni en*

⁶ Curso de Criminología, 7ª edición, Universidad Externado de Colombia, Álvaro Orlando Pérez Pinzón y otro

REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

aquellos eventos en los cuales se aplique el principio de oportunidad, los preacuerdos y negociaciones y el allanamiento a cargos.

La norma en mención –*artículo 68A del Código Penal*- volvió a ser objeto de modificación con la entrada en vigencia de la Ley 1474 de 2011, mediante la cual fueron incorporados otros delitos como los delitos contra la administración pública a fin de ser excluidos de beneficios y/o subrogados penales.

ARTÍCULO 68A. No se concederán los subrogados penales o mecanismos sustitutivos de la pena privativa de libertad de suspensión condicional de la ejecución de la pena o libertad condicional; (...)

“...Tampoco tendrán derecho a beneficios o subrogados quienes hayan sido condenados por delitos contra la Administración Pública, estafa y abuso de confianza que recaigan sobre los bienes del Estado, utilización indebida de información privilegiada, lavado de activos y soborno transnacional.

Lo dispuesto en el presente artículo no se aplicará respecto de la sustitución de la detención preventiva y de la sustitución de la ejecución de la pena en los eventos contemplados en los numerales 2, 3, 4 y 5 del artículo 314 de la Ley 906 de 2004, ni en aquellos eventos en los cuales se aplique el principio de oportunidad, los preacuerdos y negociaciones y el allanamiento a cargos...”

Finalmente, **el artículo 32 de la Ley 1709 de 2014** (Ley que entró en vigencia el 20 de enero de 2014) incorporó unas nuevas modificaciones al artículo 68A del Código Penal, aduciendo que el nuevo texto de la norma sería el siguiente:

*“ARTÍCULO 68A. EXCLUSIÓN DE LOS BENEFICIOS Y SUBROGADOS PENALES. **No se concederán;** la suspensión condicional de la ejecución de la pena; la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión; **ni habrá lugar a ningún otro beneficio, judicial o administrativo,** salvo los beneficios por colaboración regulados por la ley, siempre que esta sea efectiva, cuando la persona haya sido condenada por delito doloso dentro de los cinco (5) años anteriores.*

***Tampoco quienes hayan sido condenados por delitos dolosos** contra la Administración Pública; delitos contra las personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario; delitos contra la libertad, integridad y formación sexual; estafa y abuso de confianza que recaigan sobre los bienes del Estado; captación masiva y habitual de dineros; utilización indebida de información privilegiada; concierto para delinquir agravado; lavado de activos; soborno transnacional; violencia intrafamiliar; hurto calificado; extorsión, lesiones personales con deformidad causadas con elemento corrosivo; ...”*

Recientemente se ha modificado con la Ley 1773 de 2016, y el inciso modificado por el artículo 6 de la Ley 1944 de 2018. Es importante resaltar que aunque fue voluntad del legislador restringir cierta clase de delitos en la concesión de los mecanismos sustitutivos de la pena o los beneficios administrativos para los jueces de conocimiento en el momento de emitir la sentencia, también se tiene que con la ley vigente en su **artículo 68 A** restringió su no concesión en algunos delitos relacionados en la norma y de los cuales fue condenado el señor **EDUARDO IGNACIO ACOSTA ROJAS** como **FABRICACIÓN, TRÁFICO, PORTE O TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO, ACCESORIOS, PARTES O MUNICIONES (artículo 365 del C.P.)**, sin embargo el mismo legislador dispuso en el parágrafo 1º de la mentada norma que no se aplicaría el artículo a la libertad condicional (art 64 CP), **NI TAMPOCO PARA LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 38G del C.P.**, motivo por el cual este funcionario entrará a estudiar la petición invocada por el condenado de la prisión domiciliaria por el mencionado artículo.

Sobre este punto señaló la Corte Suprema de Justicia lo siguiente:

REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

“...No obstante, dicha regla tiene su excepción, esto es la consignada en el parágrafo 1 del mismo artículo y según la cual “Lo dispuesto en el presente artículo no se aplicará a la libertad condicional contemplada en el artículo 64 de este Código, ni tampoco para lo dispuesto en el artículo 38G del presente Código.” Es decir, cuando la petición de prisión domiciliaria se invoque con fundamento en el artículo 38G penal, no es dable negarla con fundamento en las exclusiones consignadas en el artículo 68A del mismo estatuto, sino que deberá ceñirse a las condiciones y prohibiciones que para el mismo beneficio impone la propia norma...”⁷

4.4. SOBRE LA PRISIÓN DOMICILIARIA ART 38G del C.P.

El Despacho debe iniciar su exposición advirtiendo que el día 20 de enero de 2014 se sancionó la Ley 1709 de 2014 *“Por medio de la cual se reforman algunos artículos de la Ley 65 de 1993, de la Ley 599 de 2000, de la Ley 55 de 1985 y se dictan otras disposiciones”*, misma que empezó a regir desde el momento mismo de su promulgación. El artículo 5° de dicha disposición adicionó el artículo 7 A de la Ley 65 de 1993, en el sentido de señalar que el Juez que vigila el cumplimiento de la condena de oficio, a petición del recluso o de su apoderado judicial, deberá reconocer los mecanismos sustitutivos de la pena, en aquellos casos que se verifique el cumplimiento de la totalidad de los requisitos.

Al respecto señala la norma:

“(...) Artículo 7 A. obligaciones especiales de los Jueces de Penas y Medidas de Seguridad: Los jueces de Penas y Medidas de Seguridad tiene el deber de vigilar las condiciones de ejecución de la pena y de las medidas de seguridad impuesta en la sentencia condenatoria.

Los Jueces de Penas y Medidas de Seguridad, de oficio o a petición de la persona privada de la libertad o su apoderado de la Defensoría Pública o de la procuraduría General de la Nación, también deberán reconocer los mecanismos alternativos o sustitutivos de la pena de prisión que resulten procedentes cuando verifiquen el cumplimiento de los respectivos requisitos. (...) ” (Subrayado fuera de texto).

La mentada Ley, a través de su artículo 28, adicionó el sustituto de la Prisión Domiciliaria en el sentido de agregar el artículo 38G al Código Penal (Ley 599 de 2000), el cual por sustracción de materia modifica el artículo 25 de la Ley 1453 de 2011. Dicha norma estatuye:

“(...) Artículo 28. Adicionase un artículo 38G a la ley 599 de 2000, del siguiente tenor: Artículo 38G. La ejecución de la pena privativa de la libertad se cumplirá en el lugar de residencia o morada del condenado cuando haya cumplido la mitad de la condena y concurren los presupuestos contemplados en los numerales 3 y 4 del artículo 38 B del presente Código, excepto en los casos en que el condenado pertenezca al grupo familiar de la víctima o en aquellos eventos en que fue sentenciado por alguno de los siguientes delitos: Genocidio, contra el derecho internacional humanitario; desaparición forzada; secuestro extorsivo; tortura; desplazamiento forzado; tráfico de menores; uso de menores de edad para la comisión de delitos; tráfico de migrantes; trata de personas; delitos contra la libertad, integridad, y formación sexuales; concierto para delinquir agravado; lavado de activos; terrorismo; usurpación y abuso de funciones públicas con fines terroristas; financiación del terrorismo y de actividades de delincuencia organizada; administración de recursos con actividades terroristas y de delincuencia organizada; financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas; fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido; uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos; delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes, salvo los contemplados en el artículo 375 y el inciso segundo del artículo 376 del presente código.(...)”

⁷ CSJ RAD Radicado 45900 del 1 de febrero de 2017, M.P. Dr. LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO

REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

El mencionado artículo 38 G., **fue objeto de modificación recientemente el 30 de diciembre de 2019, por la ley 2014**, la cual a través de su artículo 4 agrego conductas punibles cometidas en contra de la Administración Pública, quedando así:

Artículo 38G, la ejecución de la pena privativa de la libertad se cumplirá en el lugar de residencia o morada del condenado cuando haya cumplido la mitad de la condena y concurren los presupuestos contemplados en los numerales 3 y 4 del artículo 38B del presente código, excepto en los casos en que el condenado pertenezca al grupo familiar de la víctima o en aquellos eventos en que fue sentenciado por alguno de los siguientes delitos del presente código: genocidio; contra el derecho internacional humanitario; desaparición forzada; secuestro extorsivo; tortura; desplazamiento forzado; tráfico de menores; uso de menores de edad para la comisión de delitos; tráfico de migrantes; trata de personas; delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales; extorsión; concierto para delinquir agravado; lavado de activos; terrorismo; usurpación y abuso de funciones públicas con fines terroristas; financiación del terrorismo y de actividades de delincuencia organizada; administración de recursos con actividades terroristas y de delincuencia organizada; financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas; fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido, uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos; delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes, salvo los contemplados en el artículo 375 y el inciso 2° del artículo 376; peculado por apropiación; concusión; cohecho propio; cohecho impropio; cohecho por dar u ofrecer; interés indebido en la celebración de contratos; contrato sin cumplimientos de requisitos legales; acuerdos restrictivos de la competencia; tráfico de influencias de servidor público; enriquecimiento ilícito; prevaricato por acción; falso testimonio; soborno; soborno en la actuación penal; amenazas a testigo; ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio; en los delitos que afecten el patrimonio del Estado.

Parágrafo. los particulares que hubieran participado en los delitos de peculado por apropiación, concusión, cohecho propio, cohecho impropio, cohecho por dar u ofrecer, interés indebido en la celebración de contrato, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, acuerdos restrictivos de la competencia, tráfico de influencias de servidor público, enriquecimiento ilícito, prevaricato por acción, falso testimonio, soborno, soborno en la actuación penal, amenaza a testigos, ocultamiento, alteración, destrucción material probatorio, no tendrán el beneficio de que trata este artículo.

A su vez debe ser analizado en conjunto con lo dispuesto en los numerales 3º y 4º del artículo 38 B (creado por el artículo 23 de la Ley 1709 de 2014), que indica:

“(…) Artículo 23. Adicionase un artículo 38B a la ley 599 de 2000, del siguiente tenor:
Artículo 38B. Requisitos para conceder la prisión domiciliaria. Son requisitos para conceder la prisión domiciliaria:

1. (...)
3. QUE SE DEMUESTRE EL ARRAIGO FAMILIAR Y SOCIAL DEL CONDENADO
4. QUE SE GARANTICE MEDIANTE CAUCIÓN EL CUMPLIMIENTO DE LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES:

- A. No cambiar de residencia sin autorización previa del funcionario judicial;
 - B. Que dentro del término que fije el juez sean reparados los daños ocasionados con el delito. El pago de la indemnización debe asegurarse mediante garantía personal, real, bancaria o mediante acuerdo con la víctima, salvo que demuestre insolvencia;
 - C. Comparecer personalmente ante la autoridad judicial que vigile el cumplimiento de la pena cuando fuere requerido para ello;
 - D. Permitir la entrada a la residencia de los servidores públicos encargados de realizar la vigilancia del cumplimiento de la reclusión. Además deberá cumplir las condiciones de seguridad que le hayan sido impuestas en la sentencia, las contenidas en los reglamentos del Inpec para el cumplimiento de la prisión domiciliaria y las adicionales que impusiere el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad (...)
- (Resalta fuera de texto)**

De igual forma, debe advertirse que el numeral 7º del artículo 38 del Código de Procedimiento Penal, obliga a este funcionario dar aplicación del principio de favorabilidad

REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

cuando debido a una ley posterior hubiere lugar a reducción, modificación, sustitución, suspensión o extinción de la sanción penal, por ende, se torna imperioso estudiar si el sentenciado cumple con los nuevos requisitos dispuestos para acceder al mecanismo sustituto de la prisión, y en caso afirmativo decretar el traslado a su lugar residencia previo cumplimiento de los requisitos dispuestos para gozar del sustituto.

Por último, se trae a colación el parágrafo 1° del artículo 4° de la Ley 65 de 1993, modificado por el artículo 3° de la Ley 1709 de 2014 que como norma rectora señala lo siguiente:

*“(…) **Parágrafo 1°.** En ningún caso el goce efectivo del derecho a la libertad, a la aplicación de mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad o a cualquier otro beneficio judicial o administrativo, podrá estar condicionado al pago de la multa (…)” (Subrayado fuera de texto).*

De acuerdo al citado parágrafo, no resulta plausible negar los subrogados en aquellos casos en los que se haya impuesto pena de multa, bajo el argumento de que su pago no se ha hecho efectivo.

Aterrizando al estudio concreto del asunto, este funcionario entrará a determinar si el solicitante cumple con el lleno de los requisitos para acceder al mecanismo sustituto.

4.5. DEL CUMPLIMIENTO DE LA MITAD DE LA CONDENA.

De la pena impuesta al condenado, esto es, **54 meses de prisión**, según la norma en cita el requisito objetivo corresponde al cumplimiento de la mitad de la condena, en éste caso corresponden a **VEINTISIETE (27) MESES DE PRISIÓN**.

EDUARDO IGNACIO ACOSTA ROJAS conforme a la información que se tiene en las diligencias ha estado privado de la libertad dentro del presente asunto en dos oportunidades: i) **del 6 al 7 de octubre de 2019** (el Juzgado Promiscuo Municipal de Utiaca Cundinamarca con funciones de control de garantías en vista que el ente Fiscal no solicitó medida de aseguramiento se ordenó la libertad inmediata del imputado⁸); y ii) **desde el 14 de septiembre de 2020⁹** hasta la fecha, lo que implica que a hoy lleva **726 días**, que equivalen a **24 meses y 6 días**

Adicional a la pena física cumplida, el condenado cuenta con un total de redenciones de pena de **5 meses y 10 días**, reconocidas así:

- JEPMS Facatativá, auto interlocutorio No. 0008 del 12 de enero de 2022, reconoce 2 meses y 1.5 días.
- JEPMS Facatativá, auto interlocutorio No. 0212 del 25 de abril de 2022, reconoce 2 meses y 2 días.
- JEPMS Facatativá, auto interlocutorio No. 0462 del 26 de agosto de 2022, reconoce 1 mes y 6.5 días.

Por lo anterior, tenemos entonces que el interno **EDUARDO IGNACIO ACOSTA ROJAS** acumula un total de:

Redenciones de pena reconocidas	5 meses y 10 días
Tiempo de privación física	24 meses y 6 días
TOTAL	29 meses y 16 días

Vemos que el infractor cumple con el factor objetivo.

En cuanto a los presupuestos de los numerales 3° y 4° del artículo 38 B, se tiene:

⁸ Acta audiencia de garantías y Boleta de libertad 02 - archivo 002 – folio 4 al 8 – expediente digitalizado.
⁹ Boleta de Encarcelación No. 009 Prisión Domiciliaria Transitoria - folio 35 – archivo 002 – expediente digitalizado.

REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

4.5.1. ARRAIGO FAMILIAR:

Ontológicamente el arraigo familiar y social en materia penal se ha determinado como requisito para establecer certeza de la comparecencia del investigado a las diferentes etapas del proceso, que en caso de ser convocado y éste no acuda, se contará con información que pueda ayudar a su ubicación, en aquellos casos donde sea procedente el otorgamiento de la libertad provisional.

Mismo caso ocurre con el instituto del sustituto de la prisión intramural por domiciliaria, donde el arraigo familiar y social juega un papel fundamental para que el operador judicial en conjunto con las diferentes entidades como el Instituto Nacional Penitenciario INPEC, ejerzan un control material del cumplimiento de la condena.

El arraigo familiar debe entenderse como la coexistencia de personas que pertenezcan al núcleo familiar del procesado o condenado con éste, pero no necesariamente dicho núcleo debe revestir especiales condiciones, simplemente existir, que el sentenciado cohabite con individuos que pertenezcan a su familia, sin distinción de líneas o grados de sangre.

De otra parte, arraigo social se debe entender como el conjunto de esas condiciones en que un individuo ha asentado su vida en relación a un lugar específico, desarrollando sus actividades diarias, como trabajo, estudio, vivienda o simplemente la relación con un grupo determinado; en síntesis, el arraigo social está cimentado en la correlación de una persona con otros integrantes de una comunidad que comparte un espacio específico.

Al efecto, se tiene que se aporta el memorial suscrito por el condenado y la DECLARACION EXTRAJUIICIO No. 062 expedida por la Notaría Única de Utica Cundinamarca, rendida por la señora ELIDA EMID ACOSTA ROJAS, hermana del condenado, identificada con C.C. No. 51.653.731 expedida en Bogotá D.C. - celular 3112758345 en la que se relaciona la dirección del domicilio ubicado en el Barrio Las Brisas del municipio de Utica Cundinamarca, manifestó hacerse cargo de su hermano **EDUARDO IGNACIO ACOSTA ROJAS** en su domicilio ubicado en el referenciado inmueble, en caso de que le sea concedida la prisión domiciliaria.

Ahora bien, conforme a lo ordenado por este Juzgado en auto interlocutorio No. 0462 del 26 de agosto de 2022, se emite por parte del Asistente Social del Juzgado el Informe de Valoración Asistencia Social de fecha 2 de septiembre de 2022 por el cual se indicó:

“(…) RESULTADOS

SITUACIÓN ENCONTRADA

Los días 30 y 31 de agosto y primero de septiembre de 2022, fueron realizadas dos entrevistas telefónicas de una hora de duración al abonado de celular, número 3112758345. Se trata del número celular de la hermana del señor condenado.

Previamente, por parte del grupo familiar del condenado se remitió la información relativa al inmueble en arrendamiento, donde el señor condenado EDUARDO IGNACIO ACOSTA ROJAS, pretende ser autorizado para continuar purgando pena en Prisión Domiciliaria.

Fueron remitidos contrato de arrendamiento, recibos de servicios públicos del mismo lugar y fotografías que permitieron verificar tal aspecto.

La señora entrevistada tiene 64 años es oriunda de Junín (Cundinamarca), casada hace más de 37 años y residente en Útica hace aproximadamente 20 años.

ELIDA EMID ACOSTA ROJAS se dedica al hogar y a los oficios propios de la casa lote rural que ocupa con su señor esposo, ÁNGEL MARÍA GARZÓN LEÓN quien tiene 68 años.

REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

La señora entrevistada comenta que tanto ella como su esposo aun trabajan para proveerse sus medios de sustento porque ninguno de ellos cuenta con pensión o ingresos. En ese sentido el señor trabaja como labriego y en oficios varios, así como en la siembra de maíz.

La hermana del señor condenado, ELIDA EMID ACOSTA ROJAS es madre de cinco hijos, todos mayores de edad e independientes. El hijo menor de dicha señora, ÁNGEL DANIEL GARZÓN ACOSTA, de 22 años, reside con sus padres en la casa lote que ocupan en la vereda Brisas de Útica. Él trabaja como guía turístico en ese municipio, siendo soltero sin hijos.

El condenado señor EDUARDO IGNACIO ACOSTA ROJAS residía con este grupo familiar antes de su encarcelamiento, ocurrida hace año y medio, habiendo pasado también alrededor de año y medio en detención preventiva domiciliaria en ese lugar.

El condenado reside en el municipio de Útica hace más o menos tres años, momento cuando trasladó su residencia allí, tras su separación.

En lo reportado, el señor condenado tiene 50 años, es padre de dos hijos y se separó hace más o menos 5 años.

Respecto a los hijos del señor condenado, se reportó que ambos son mayores de edad y residen en una vivienda del Barrio 20 de Julio de la ciudad de Bogotá. Residen con su señora madre, MARLÉN MEJÍA, quien trabaja en casas de familia.

Los hijos del señor condenado son:

- *ANDRES ACOSTA MEJIA (19 años), salió del ejército y trabaja en un almacén de calzado.*
- *JUAN PABLO ACOSTA MEJÍA (23 años), trabaja en construcción y vive en unión libre.*

Respecto a la familia del señor EDUARDO IGNACIO ACOSTA ROJAS, se evidenció que recibe apoyo afectivo y económico de sus hermanos y que la relación con sus hijos es distante.

Tras su separación, el señor condenado reside en Útica, compartiendo residencia con su hermana y el grupo familiar de aquella y en lo reportado, dedicado a labores del campo, trabaja en moliendas, se plantea que es una persona muy trabajadora y un padre responsable quien siempre está al pendiente de sus hijos pese a que aquellos no son cercanos con él.

Durante la estancia carcelaria de más de un año y medio, el señor condenado EDUARDO IGNACIO ACOSTA ROJAS no recibió visitas familiares. Sus hijos han apoyado mínimamente a su padre en prisión. La señora ELIDA expresa que no lo visitaron porque no les gusta el ambiente carcelario ni ser sometidos a requisas y que además por ser cristianos los días domingos les es muy difícil trasladarse a Villeta para la visita carcelaria.

La familia es de extracción humilde y campesina se expresa preocupada y avergonzada por la situación acaecida con el condenado.

En lo reportado, EDUARDO IGNACIO ACOSTA ROJAS fue condenado por un porte ilegal de armas, delito del que dicho señor es reincidente.

La hermana del señor condenado expresa que, si bien EDUARDO IGNACIO es una persona muy trabajadora, padre responsable y “dadivoso” siempre ha tenido fascinación por las armas. La señora ELIDA manifiesta que “le gustan las armas y siempre lo cogen con esa joda”.

REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

En lo manifestado, durante el año y medio de privación que lleva en Villeta, el condenado aprendió a tejer, elabora bolsos y mochilas, se encuentra arrepentido y ha estado preocupado por el momento en que pueda continuar purgando la pena en prisión domiciliaria.

*La residencia a la cual desea ser autorizado EDUARDO IGNACIO ACOSTA ROJAS para continuar purgando pena a través de prisión domiciliaria está ubicada en la **vereda Barrio Las Brisas, casa sin número de Útica (Cundinamarca)**.*

Se trata de una vivienda rural en donde la señora ELIDA y su esposo residen hace más de 20 años. La vivienda es propiedad de ÁLVARO JIMÉNEZ Y ANA ROJAS, familiares quienes decidieron dejar la casa bajo su cuidado y por ello no les cobran arriendo alguno.

CONDICIONES HABITACIONALES

*La vivienda en la cual el señor condenado pretende ser autorizado para continuar purgando pena a través de Prisión Domiciliaria está ubicada en la **vereda Barrio Las Brisas, casa sin número de Útica (Cundinamarca)**. residencia perteneciente al estrato 1.*

La casa de habitación donde residiría EDUARDO IGNACIO ACOSTA ROJAS consta de tres habitaciones, sala-comedor, cocina, baño baños y patio de ropas.

Si bien la vivienda se ubica en el sector rural del municipio, dista a apenas 10 minutos del casco urbano de Útica.

La casa lote tiene aproximadamente 10 mts X 30 mts, siendo de una sola planta. Allí encontramos la casa de habitación y un espacio dedicado a la cría y engorde de gallinas, además de un pequeño sembradío de maíz.

La casa cuenta con servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica, agua y alcantarillado, gas por cilindro y estufa de leña.

Las condiciones de habitabilidad encontradas fueron evaluadas como adecuadas, el lugar cuenta con buenas condiciones internas y externas.

En relación con aspectos de seguridad, se encontró que las condiciones evaluadas fueron calificadas como de riesgo bajo, puesto que se trata de un sector rural muy cercano al casco urbano de Útica.

ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS

Respecto a aspectos relacionados con la economía familiar, se conoció que los ingresos principalmente los obtiene esta familia a través del pago de arriendo de una casa de propiedad de la señora ELIDA y su esposo, quienes tienen una casa en Santa Librada en Bogotá.

REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

En dicha vivienda residen tres hijos de la señora ELIDA y su esposo, quienes realizan a sus padres un pago mensual de \$500.000 por ocupar la casa.

Como fue planteado, el señor ÁNGEL, esposo de la señora ELIDA trabaja como jornalero por días y también tienen algún ingreso no regular con los beneficios que obtienen del aprovechamiento de la finca, particularmente la venta de maíz y eventualmente gallinas.

Así mismo, la señora entrevistada comenta que reciben apoyo económico ocasional de sus hijos, principalmente de Ángel Daniel quien reside con ellos.

Respecto a los gastos se encontró que mensualmente dicha familia gasta alrededor de un millón de pesos en todo lo relativo a la economía familiar.

Dado que la familia no paga arriendo, sus ingresos son apenas suficientes para el sostenimiento económico, principalmente el pago de alimentación.

La situación económica que fue observada en el ámbito familiar es de pobreza, contando con recursos económicos apenas suficientes para el cubrimiento de necesidades del grupo familiar.

La familia de acogida del señor condenado espera que EDUARDO IGNACIO ACOSTA ROJAS colaboré también en los gastos, trabajando en la molienda y en otras labores del campo a las que se dedicaba antes de ser privado de la libertad.

CONCEPTO

El señor condenado cuenta con un grupo familiar conformado por su hermana, el esposo de aquella y secundariamente sus hijos, personas quienes le han brindado apoyo y colaboración tanto ahora estando privado de la libertad como en otros momentos de la vida.

El señor condenado pertenece a una familia que se observa aunada y estable en el tiempo y que funciona de manera positiva y que en medio de las condiciones económicas de pobreza, están prestos a recibirlo y apoyarlo una vez, eventualmente, le sea concedida la prisión domiciliaria.

La familia del señor condenado está asentada en zona rural aledaña al casco urbano del municipio de Útica, lugar donde también residía el señor condenado antes de ser privado de la libertad.

Respecto al lugar donde el condenado desea ser autorizado para residir, se cuenta con un espacio de vivienda adecuado y buenas condiciones de seguridad, en el que la familia presenta estabilidad habitacional por más de 20 años. Además de ello, el medio rural provee oportunidades de trabajo al señor condenado a través de oficios propios del campo.

Por parte de la familia de aquel, se expresa solidaridad económica y existencial hacia EDUARDO IGNACIO ACOSTA ROJAS, situación que implica contar con vínculos afectivos y redes de apoyo social que favorecen su reinserción social y posterior culminación del proceso de resocialización al que fuera sometido (...).

Igualmente, se tiene que no se han reportado por parte de las directivas de la CARCEL Y PENITENCIARIA MEDIA SEGURIDAD DE VILLET A CUNDINAMARCA, quejas reportes de novedades de fugas, ni transgresiones que haya cometido el interno durante su reclusión, lo cual se pudo comprobar en la cartilla biográfica.

Y todo esto en razón a que el arraigo familiar y social juega un papel fundamental para que el operador judicial que en conjunto con las diferentes entidades como el Instituto Nacional Penitenciario INPEC, deberán ejercer un control material del cumplimiento de la condena,

REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

pues así lo ha determinado la Ley a través del artículo 29 A de la Ley 65 de 1993 el cual textualmente reza:

ARTÍCULO 29A. EJECUCIÓN DE LA PRISIÓN DOMICILIARIA. <Artículo adicionado por el artículo 8 del Decreto 2636 de 2004. El nuevo texto es el siguiente:> Ejecutoriada la sentencia que impone la pena de prisión y dispuesta su sustitución por prisión domiciliaria por el juez competente, este enviará copia de la misma al Director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, quien señalará, dentro de su jurisdicción, el establecimiento de reclusión que se encargará de la vigilancia del penado y adoptará entre otras las siguientes medidas:

1. Visitas aleatorias de control a la residencia del penado.
2. Uso de medios de comunicación como llamadas telefónicas.
3. Testimonio de vecinos y allegados.
4. Labores de inteligencia.

Durante el cumplimiento de la pena el condenado podrá adelantar las labores dirigidas a la integración social que se coordinen con el establecimiento de reclusión a cuyo cargo se encuentran y tendrá derecho a la redención de la pena en los términos establecidos por la presente ley.

En caso de salida de la residencia o morada, sin autorización judicial, desarrollo de actividades delictivas o incumplimiento de las obligaciones inherentes a esta pena, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, dará inmediato aviso al Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, para efectos de su revocatoria.

4.5.2. La concesión de este mecanismo será posible si no está incurso en algunos de los delitos relacionados en dicho articulado.

Al verificar este requisito, se tiene que conforme a la sanción impuesta por el fallador y la relación del artículo para la época de los hechos no aparecen dentro del mismo el delito endilgado al condenado, esto es **FABRICACIÓN, TRÁFICO, PORTE O TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO, ACCESORIOS, PARTES O MUNICIONES (artículo 365 del C.P.)**.

El artículo analizado señala que quienes hayan sido condenados por los delitos allí mencionados les serán negados la concesión del sustituto penal. Empero, si no está inmerso en alguna de las causales de improcedencia, el juez solo deberá analizar que cumpla con los demás presupuestos legales.

4.5.3. Que dentro del término que fije el juez sean reparados los daños ocasionados con el delito. El pago de la indemnización debe asegurarse mediante garantía personal, real, bancaria o mediante acuerdo con la víctima, salvo que demuestre insolvencia.

Dentro de la actuación allegada no aparece que se iniciara incidente de reparación de parte de las víctimas, motivo por el cual cumple con este requisito.

5. CONCLUSIÓN

En atención a lo dispuesto, se observan cumplidos todos los presupuestos contenidos en el artículo 38 G adicionado por la Ley 1709 de 2014, para que continúe purgando su pena en el lugar del domicilio, esto es, en la **Vereda Barrio Las Brisas, casa sin número del municipio de Utica Cundinamarca - Celular 3112758345**

No obstante, si la dirección de residencia de sus familiares varió recientemente y como consecuencia el sentenciado deba cumplir la privación de la libertad en lugar distinto al señalado, deberá informarse inmediatamente a este Juzgado.

Para hacer efectiva esta sustitución, el condenado deberá suscribir diligencia de compromiso en los términos establecidos en el numeral 4º del artículo 38B del Código Penal y deberá constituir caución prendaria en el equivalente a **UN (1) SALARIO MÍNIMO LEGAL**

REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

MENSUAL VIGENTE, en atención a sus condiciones socioeconómicas recopiladas en el decurso procesal, en las que se estableció que **EDUARDO IGNACIO ACOSTA ROJAS** carece de recursos económicos dado al periodo de tiempo que permaneció privado de la libertad, se infiere entonces que no se encuentra en capacidad de sufragar sumas mayores a la antes establecida. Además, teniendo en cuenta el amplio periodo que permanecerá privado de la libertad, se advierte que se impone esta cantidad como justa para garantizar las obligaciones que la concesión del sustituto conllevan. Dicha suma puede ser cancelada en dinero en efectivo a través de título judicial, según lo dispone el artículo 369 del Código de Procedimiento Penal (Ley 600 de 2000).

Constituida la caución y suscrita la diligencia de compromiso se dispondrá que el Instituto penitenciario y carcelario donde actualmente se encuentra recluso proceda al traslado a su domicilio, bajo las medidas de seguridad que el caso amerite.

Teniendo en cuenta que el sentenciado se encuentra descontando pena en la CÁRCEL Y PENITENCIARIA MEDIA SEGURIDAD DE VILLET A CUNDINAMARCA, se ordena por secretaría **COMISIONAR** a dicha Dirección, con el fin de notificar personalmente la presente decisión al sentenciado.

Finalmente, se ordena por la Secretaría del Juzgado **PROCEDA** expedir la respectiva **BOLETA DE PRISIÓN DOMICILIARIA** a nombre del enjuiciado, previa constitución de la caución prendaria (1 SMLMV) mediante póliza judicial y el diligenciamiento del acta de compromiso enunciada en este proveído ante la Dirección del Penal, ordenando su traslado al lugar fijado como domicilio (prisión) en la **Vereda Barrio Las Brisas, casa sin número del municipio de Utica Cundinamarca - Celular 3112758345, a favor de EDUARDO IGNACIO ACOSTA ROJAS.**

5.1. Sobre la Competencia

Debido a que el condenado va a continuar purgando pena bajo el mecanismo sustitutivo de la prisión domiciliaria en el municipio de Utica Cundinamarca, por la Secretaría del juzgado una vez quede ejecutoriado el presente auto, **PROCEDASE** a ENCASILAR las diligencias en el respectivo anaquel para la vigilancia de la pena que le resta por descontar.

6.- OTRAS CONSIDERACIONES

6.1 DEL ORDEN PARA PROFERIR DECISIONES

Como han sido múltiples los requerimientos por parte de los infractores y de los demás condenados que vigila este juzgado, esto ha ocasionado a su vez, innumerables entradas y salidas del expediente de secretaría al despacho del juzgado, lo cual interrumpe los términos que la ley consagra (Artículo 118 y ss Código General del Proceso).

En efecto aparecen variadas radicaciones que presentan interrupciones de términos al despacho con las diferentes diligencias. Al respecto señala el artículo 18 de la Ley 446 de 1998:

***“ARTICULO 18. ORDEN PARA PROFERIR SENTENCIAS.** Es obligatorio para los Jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada o de prelación legal. Con todo, en los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tal orden también podrá modificarse en atención a la naturaleza de los asuntos o a solicitud del agente del Ministerio Público en atención a su importancia jurídica y trascendencia social...”*

Por lo anterior, no puede este funcionario y sus servidores alterar el turno en que entran al despacho las diferentes solicitudes invocadas por los condenados. Además se recalca que a raíz de la no prorroga de los juzgados y cargos de descongestión este juzgado quedó con 2.396 asuntos que a hoy se ha incrementado en más de 5.532 procesos que tenemos en estos momentos con conocimiento no solo de la Cárcel de Funza, sino de Villeta, de los

REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

Miembros del Ejército EJECO y PONAL, Estaciones de Policía del Circuito de Facatativá, aparte de las prisiones domiciliarias.

Informo que el juzgado en la actualidad cuenta con 5 cargos el del suscrito, un Asistente Social, Un Asistente Administrativo, una Secretaria y un sustanciador designado el pasado 9 de noviembre de 2020.

Además de lo anterior el volumen de requerimientos, y la complejidad de los procesos tornan necesario hacer un estudio minucioso de las solicitudes, como en el presente caso en lo referente al procedimiento y estudio de la prisión domiciliaria.

Por último se debe resaltar que los funcionarios en las providencias estamos sometidos al imperio de la ley como lo señala el artículo 230 de la Constitución Nacional, sustento que fue argumentado por la Corte Suprema de Justicia:

“... los funcionarios judiciales están sometidos al imperio de la ley, tal como lo establece el artículo 230 de la Constitución Política, de modo que no es posible desconocer el principio de legalidad, principio basilar del Estado Social de Derecho, por abstractos motivos de «justicia y equidad»¹⁰, a los cuales acudió el representante, o porque se considere, frente a situaciones particulares, que extinguir la acción penal y decretar la cesación del procedimiento por prescripción afecte los derechos fundamentales de las víctimas «al debido proceso y a la tutela judicial efectiva».

... las consecuencias adversas en el evento de adoptar la postura del recurrente serían intolerables, pues no sólo llevaría a adoptar decisiones arbitrarias y subjetivas, en un claro menoscabo de la seguridad jurídica y el principio de igualdad ante ley... (CSJ AP 2 Jul. 2014, Rad. 41793).

En un pronunciamiento reciente, afirmó:

“...6. Finalmente, como en otras ocasiones ha dicho esta Sala, si la administración de justicia adopta decisiones adversas a las peticiones o a los intereses de quienes a ella concurren, no por ello puede concluirse que se han conculcado derechos fundamentales, en la medida que sus providencias sean proferidas por los funcionarios que ostenten la competencia y se sujeten a los cánones constitucionales y legales que reglan su actividad...”¹¹

De acuerdo a la jurisprudencia y lo señalado por la Carta Política queda entendido de que el funcionario judicial debe ajustarse a la ley por lo que analizadas las diligencias este despacho encuentra que el condenado **EDUARDO IGNACIO ACOSTA ROJAS** reúne los requisitos estipulados en el artículo 38G de la Ley 599 de 2000, motivo que lo lleva a acceder la petición invocada.

Por último y en lo que respecta a la presente decisión ello no implica que ese criterio que se adoptó o que lo hayan adoptado otros despacho judiciales, obligue a otros operadores jurídicos de esa especialidad a aplicarlo indefectiblemente a sus asuntos, pues un proceder contrario “desconocería el principio de imparcialidad en la medida en que el ordenamiento jurídico colombiano, la responsabilidad penal de un individuo se establece, y debe ser así, de manera individual, de acuerdo con las circunstancias de tiempo, modo y lugar que ofrece cada caso en concreto y a las particularidades que rodean el actuar del sujeto agente, las cuales determinan la valoración de los requisitos para acceder o no, a beneficios como la libertad condicional”.¹²

¹⁰ Ibídem.

¹¹ CSJ T 102248

¹² C.S.J. RAD 97792

REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

6.2. De la Situación Actual del Juzgado.

En una primera oportunidad por disposición del Consejo Seccional de la Judicatura mediante el Acuerdo No CSJCUO20-93 del 7 de diciembre de 2020 AUTORIZÓ, por traslado de sede, el cierre extraordinario de los Juzgados y Centro de Servicios de Facatativá – Cundinamarca, según programación dada para los días 10, 11, 14, 15, 16 y 18 de diciembre de 2020.

Luego una vez instalados en la nueva sede mediante los Acuerdos CSJUA21-30 del 3 de mayo de 2021 el mismo Consejo aclaró el Acuerdo CSJCUC21-126 del 2 de mayo de 2021 autorizó el cierre extraordinario de la Sede Judicial de Facatativá y dispuso *“suspensión de términos de los juzgados que se encuentran ubicados en la sede judicial de Facatativá a partir del 3 de mayo y hasta el 7 de mayo de 2021, inclusive*, debido al ingreso violento de personas no autorizadas que ocasionaron en las instalaciones saqueos, quemas y disturbios en la sede judicial y de allí en adelante hemos tenido que ingresar custodiados por la Policía o el Ejército Nacional para poder ubicar y verificar materialmente los procesos para el respectivo pronunciamiento.

Sumado a ello en el Acuerdo CSJCUA21-32 del 7 de mayo de 2021 autorizó a los jueces y empleados adelantar sus funciones de Administración de justicia, mediante la utilización de herramientas tecnológicas y en condiciones de trabajo desde casa. Y se agrega la situación de orden público que se presentó en el municipio de Facatativá que ha sido golpeado de forma indiscriminada por algunos ciudadanos que el viernes 28 de mayo y sábado 29 de mayo de 2021, se presentó en horas de la noche el ingreso violento de personas no autorizadas a la Sede Judicial, que ocasionaron, por segunda vez, daños, hurtos, destrozos y situaciones de vandalismo en general en dicha sede, afectando los despachos judiciales y el centro de servicios judiciales, viéndose afectada la prestación del servicio de Administrar Justicia en la Sede Judicial de Facatativá.

Como consecuencia atendiendo las directrices trazadas por el Consejo Seccional de la judicatura de Cundinamarca y la Dirección Ejecutiva Seccional de Cundinamarca, Bogotá y Amazonas por razones de orden público presentadas en este municipio se ordenó el cierre extraordinario de la Sede Judicial y suspensión de términos hasta el 18 de junio de 2021 y al ser pioneros en la digitalización de los expedientes nos correspondió el alistamiento de todos (4500 aproximadamente) para remitirlos a la ciudad de Bogotá para su digitalización trasladados por la empresa contratada.

Nuevamente se presentaron nuevos actos de vandalismo y en Acuerdo No CSJCUC21-47 del 24 de junio de 2021 el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca autorizó la prórroga del cierre extraordinario y la suspensión de términos de los juzgados de la jurisdicción penal ubicados en la sede judicial de Facatativá (Juzgado 1o y 2o Penal del Circuito de Facatativá-Juzgado 1o y 2o Penal Municipal de Facatativá y Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Facatativá), a partir del 26 de junio y hasta el 29 de junio de 2021. Además, en horas de la noche del 29 de junio se presentaron nuevos actos de vandalismo e incineración en la sede judicial lo que originó una nueva prórroga hasta el 21 de julio de 2021. En el momento a partir del mes de noviembre y diciembre del año anterior nos ubicaron temporalmente en una sede pequeña y a la fecha no nos han remitido los procesos físicos, sino que se trabaja con aquellos que han digitalizado y con la base de datos que no se perdió en los computadores del juzgado.

Del mismo modo con el personal que contamos (juez, secretaria, asistente social, asistente administrativo y oficial mayor (a partir de noviembre de 2020) para la carga laboral el volumen de requerimientos, y la complejidad de los procesos tornan necesario hacer un estudio minucioso de las solicitudes, como en el presente caso en lo referente al procedimiento y estudio de la situación jurídica del sentenciado.

7.- DECISIÓN

En consecuencia, y sin necesidad de otras consideraciones, el **JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DEL CIRCUITO DE FACATATIVÁ, CUNDINAMARCA,**

REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

RESUELVE

PRIMERO. – RECONOCER que hasta la presente fecha el interno **EDUARDO IGNACIO ACOSTA ROJAS** identificado con C.C. No. 80.376.435 tiene descontado por pena física más las redenciones reconocidas un total de **29 MESES y 16 DÍAS**.

SEGUNDO. - CONCEDER la sustitución de la prisión en establecimiento penitenciario por la prisión domiciliaria instituida en el artículo 38G del Código Penal, al sentenciado **EDUARDO IGNACIO ACOSTA ROJAS** identificado con C.C. No. 80.376.435, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de la providencia.

TERCERO. - COMISIONAR al Director de la CÁRCEL Y PENITENCIARIA MEDIA SEGURIDAD DE VILLET A CUNDINAMARCA, a fin de que se sirva notificar personalmente la presente decisión al interno **EDUARDO IGNACIO ACOSTA ROJAS** quien se encuentra recluido en dicho penal.

CUARTO. - Finalmente, se ordena por la Secretaría del Juzgado **PROCEDA** expedir la respectiva **BOLETA DE PRISIÓN DOMICILIARIA** a nombre del enjuiciado, previa constitución de la caución prendaria (1 SMLMV) mediante póliza judicial y el diligenciamiento del acta de compromiso enunciada en este proveído ante la Dirección del Penal, ordenando su traslado al lugar fijado como domicilio (prisión) en la **Vereda Barrio Las Brisas, casa sin número del municipio de Utica Cundinamarca - Celular 3112758345, a favor de EDUARDO IGNACIO ACOSTA ROJAS**.

QUINTO. - DISPONER que una vez el sentenciado suscriba la diligencia de compromiso prevista en el numeral 4º del artículo 38B del Código Penal y constituya la caución prendaria impuesta, el Director de la CÁRCEL Y PENITENCIARIA MEDIA SEGURIDAD DE VILLET A CUNDINAMARCA, proceda a lo pertinente respecto a la reseña del sentenciado ante el Establecimiento Carcelario competente y el traslado a la dirección **Vereda Barrio Las Brisas, casa sin número del municipio de Utica Cundinamarca - Celular 3112758345**, bajo las medidas de seguridad que el caso amerite.

SEXTO. - Una vez ejecutoriado el presente auto, por la Secretaría del Juzgado **PROCEDASE** a ENCASILAR las diligencias en el respectivo anaquel para la vigilancia de la pena que le resta por descontar.

SEPTIMO - Envíese copia de esta decisión al director de la CARCEL Y PENITENCIARIA MEDIA SEGURIDAD DE VILLET A CUNDINAMARCA, para que forme parte de la hoja de vida del condenado y se tome atenta nota de ello.

Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y de apelación.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NELSON NOGUERA PINILLOS
JUEZ